

Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En los antecedentes RUC N° 2200185369-8, RIT N° 406-2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, condenó a José Luis Fuentes Aracena y Arturo Bernardo Fuentes Aracena, en calidad de autores del delito de contrabando aduanero, previsto y sancionado en los artículos 168 y 179 letra e) de la Ordenanza de Aduanas, en grado de desarrollo de consumado, perpetrado en Viña del Mar y descubierto el día 24 de febrero de 2022, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas.

Por la misma sentencia se les condena a pagar una multa a beneficio fiscal, ascendente a la suma de \$ 51.000.000.- (cincuenta y un millones de pesos).

El fallo sustituye la pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva, por el término de tres años y un día.

Las defensas de los sentenciados interpusieron recursos de nulidad contra el indicado fallo, los que se conocieron en la audiencia pública de 16 de enero pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

**Considerando:**

**Primero:** Que el recurso interpuesto por la defensa de Arturo Bernardo Fuentes Aracena se sustenta en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del



procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, defecto que se configuraría en el caso en estudio porque el procedimiento administrativo y policial llevado a cabo por funcionarios del Servicio de Aduanas y la Policía de Investigaciones de Chile se realizó fuera de las facultades y casos en que la ley los autoriza a actuar.

Precisa que el Director Regional de Aduanas, con fecha 23 de febrero de 2022, dicta la resolución N° 561, la que ordena efectuar una fiscalización en el domicilio ubicado en Los Aromos N° M-9, Forestal, Viña del Mar, que corresponde al domicilio del imputado José Fuentes Aracena, sin que durante la investigación, como tampoco en el juicio oral respectivo, se dieran a conocer las presunciones a las que hacía alusión el acto administrativo, por lo que ni el imputado ni su defensa pudieron conocerlas.

Agrega el recurrente que, en virtud de esa resolución, los funcionarios del Servicio de Aduanas, acompañados por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, el día 24 de febrero de 2022, acuden al domicilio que señalaba la resolución, donde estaba José Fuentes Aracena, a quien le habrían explicado el motivo de su presencia, observando los agentes unas cajas envueltas en bolsas plásticas de color negro, por lo que en esa etapa del procedimiento no existía flagrancia alguna, como tampoco algún indicio que permitiera continuar con el procedimiento, dado que no era posible ver el contenido de las bolsas negras.

Sin embargo, y luego de una supuesta autorización otorgada por José Fuentes Aracena, la que no se incorporó en el juicio, tales funcionarios ingresan al domicilio y abren las bolsas, encontrando en su interior numerosas cajetillas, tanto



en el antejardín como en otras piezas del domicilio, sin contar con la documentación que acreditara su internación legal al país, por lo que proceden a detener a los dos imputados, sin contar con facultades legales para ello, pues no procede la detención por flagrancia, al tratarse de un delito previa instancia particular, sin que existiera alguna querrella o denuncia interpuesta por el Servicio Regional de Aduanas.

Expresa, por otra parte, que la declaración auto inculpatória de Arturo Fuentes Aracena, esgrimida por los funcionarios policiales, fue obtenida ilegalmente, pues se hizo sin que se diera lectura a sus derechos en forma previa.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso por la causal de nulidad invocada, se anule el juicio oral y la sentencia, ordenándose excluir toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público, y luego, se disponga la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

**Segundo:** Que el abogado del imputado José Luis Fuentes Aracena dedujo recurso de nulidad también fundado en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, basado en la afectación del derecho a un debido proceso con relación a las normas que cautelan el derecho a la intimidad, a guardar silencio y a la inviolabilidad del hogar, toda vez que se interrogó al imputado fuera del marco legal, obteniendo así evidencias incriminatorias, realizando diligencias investigativas autónomas por la policía, y un posterior ingreso al domicilio del acusado e incautación de evidencia fuera de los supuestos legales, por funcionarios que no eran policías.

Señala que el procedimiento sería ilegal, toda vez que no existía denuncia previa al momento de proceder a la fiscalización, requisito de procesabilidad



fundamental, tratándose de un delito de contrabando aduanero, el cual tiene naturaleza de acción penal pública previa instancia particular, interponiéndose la querrella por el Servicio Nacional de Aduanas posteriormente, incluso, a la audiencia de control de detención de los acusados.

Añade que al imputado se le realizan consultas sin que previamente se haya dado lectura a los derechos que le asisten, ingresando a su domicilio.

De lo expuesto, concluye que son tres las infracciones que afectan las garantías del imputado, las que consisten en su detención fuera de las hipótesis que establece la ley; ausencia de lectura de los derechos, y que no se cumplían los requisitos para efectuar una entrada y registro de su domicilio.

Afirma que los funcionarios del Servicio de Aduanas debieron abstenerse de realizar diligencias al constatar que estaban en presencia de un delito, por cuanto corresponde a una facultad exclusiva del Ministerio Público, debiendo limitarse a efectuar la denuncia para poner en conocimiento de dicha institución los hechos que apreciaron.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de nulidad por la causal de nulidad invocada, se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura los medios de prueba que indica, disponiéndose la realización de un nuevo juicio oral por el tribunal no inhabilitado.

**Tercero:** Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para acreditar las circunstancias constitutivas de las causales esgrimidas, la



defensa de José Fuentes Aracena incorporó como prueba, copias de documentos y pasajes de registros de audio de declaraciones prestadas por testigos.

**Cuarto:** Que es conveniente recordar que la sentencia tuvo por acreditados, en su razonamiento décimo cuarto, los siguientes hechos: *“El día 24 de febrero del 2022, alrededor de las 9:40 horas, al interior del inmueble ubicado en Pasaje Los Aromos N° M-9, sector Forestal, Viña del Mar, los imputados Arturo Bernardo Fuentes Aracena y José Luis Fuentes Aracena estaban en posesión de mercaderías extranjeras prohibidas para la venta consistentes en: 6.600 cajetillas de cigarrillos marca “Eight Convert Mint Capsule”, 17.610 cajetillas de cigarrillos marca “Fox Soft Pack”, 12.040 cajetillas de cigarrillos marca “Carnival Blue”, 4.150 cajetillas de cigarrillos marca “Hills Blue” y 11.400 cajetillas de cigarrillos marca “Carnival Silver”, el total de las especies incautadas asciende a 5.180 cartones, correspondientes a 51.800 cajetillas de cigarrillos, cuyo avalúo comercial asciende a la suma aproximada de \$110.388.000.-, todas especies que fueron introducidas al territorio nacional desde el extranjero, operación que se realizó al margen del sistema impositivo interno y con el correspondiente perjuicio fiscal.”* (sic)

Estos hechos fueron calificados en la sentencia como un delito consumado de contrabando aduanero, previsto y sancionado en los artículos 168 y 170 letra e) de la Ordenanza de Aduanas.

**Quinto:** Que ambos recursos de nulidad se sustentan en que las infracciones denunciadas se producen porque los funcionarios del Servicio de Aduanas y de la Policía de Investigaciones, que asistieron a los primeros, ejecutaron actuaciones fuera del ámbito de sus atribuciones, en especial el registro del inmueble, así como la toma de declaración de uno de los imputados se



verificó sin efectuar las advertencias que establece el Código Procesal Penal, como también ingresaron a su domicilio sin contar con una autorización legalmente otorgada por un juez de garantía, recolectando la evidencia incriminatoria de manera ilegal.

**Sexto:** Que, en el caso sub lite, al parecer de los sentenciadores, el hallazgo de las especies proviene de la actividad fiscalizadora otorgada por la ley al Servicio Nacional de Aduanas.

Es así, que en ejercicio de dicha actividad, la autoridad administrativa dictó una resolución de carácter administrativo ajustada a derecho, emanada de la autoridad competente, la que fue otorgada dentro de sus facultades legales otorgadas en los artículos 22, 23 y 25 del Decreto con Fuerza de Ley 329 del año 1979, que autoriza que el Director Nacional de Aduanas puede ordenar la entrada, registro e incautaciones en los lugares en que se encuentren o se presuma fundadamente que se encuentran las mercancías a fiscalizar, pudiendo delegar dicha atribución en los funcionarios que designe.

Añaden que se acreditó que el investigador criminalístico del Servicio Nacional de Aduanas, Marco Antonio González Bahamonde, quien había sido expresamente designado para esa fiscalización, procedió a presentarse en el domicilio de José Luis Fuentes Aracena, quien afirmó ser su propietario, por lo que le entregó copia de la resolución N° 561 y fundado en ese acto administrativo, el personal de Aduanas, con el auxilio de la Brigada de Delitos Portuarios de Valparaíso, ingresaron al lugar, encontrando 5.180 cartones de cigarrillos, por lo que requirieron se exhibieran la documentación para verificar el origen de tales



mercaderías, lo que no aconteció, momento en que se configuró a su respecto del delito de contrabando aduanero.

En base a todo lo anterior, fue posible acreditar que el descubrimiento de las especies proviene de una resolución de carácter administrativo ajustada a derecho y emanada de la autoridad competente, sin que incida, en la legalidad de ese hallazgo, y consecuentemente en la legalidad de la prueba aportada en el juicio.

**Séptimo:** Que en la especie se ha esgrimido como fundamento para que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas se constituyera en el domicilio de uno de los imputados, auxiliados por funcionarios de la Policía de Investigaciones, la resolución N° 561 dictada por la autoridad administrativa, que facultaba la entrada y registro del inmueble, como la incautación de mercancía internada ilegalmente a territorio nacional, por lo que ingresaron a la propiedad, observando en el antejardín varios bultos envueltos con bolsas plásticas negras, las que, luego de su registro, constataron que eran cigarrillos, careciendo de la documentación que acreditara su ingreso regular al país, para luego constatar que al interior de la casa habían más cajas con el mismo contenido. De ello habría surgido la acreditación de la comisión de un delito aduanero, procediendo los agentes policiales a detener a los imputados.

**Octavo:** Que resulta necesario referirse en primer término a las facultades del Servicio Nacional de Aduanas ejercidas en este caso.

Sobre el particular, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 329, de 20 de junio de 1979, modificado por la Ley N° 19.806, estableció que *“Para el ejercicio de las*



*facultades y cumplimiento de las obligaciones establecidas en ésta o en otras leyes cuya aplicación, fiscalización o control corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, el Director Nacional podrá ordenar la entrada, registro e incautaciones en los lugares en que se encuentren o se presuma fundadamente que se encuentran las mercancías a fiscalizar, así como los libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos relativos a las mismas. Iguaes atribuciones tendrán los funcionarios en quienes el Director Nacional delegue especialmente tales facultades.*

*El cumplimiento de las órdenes de entrada y registro o de incautación corresponderá a los funcionarios designados en la respectiva orden, quienes, en caso de encontrar oposición, requerirán el auxilio de la fuerza pública, la que les deberá ser prestada por los funcionarios de la policía.*

*Con todo, la negativa injustificada a exhibir libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos, cuando fueren requeridos formalmente por el Servicio en un acto de fiscalización, constituirá una contravención que será sancionada con multa de hasta una vez el valor de las mercancías objeto de la fiscalización.”*

De la norma citada, queda de manifiesto que los funcionarios del Servicio de Aduanas tienen facultades en la zona secundaria para efectuar fiscalizaciones a fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso de mercancías al país, que incluye la autorización de entrar y registrar el domicilio que es objeto de esa actividad, debiendo cumplir el acto administrativo que la autorice con los requisitos que establece el mencionado artículo 23.





**Noveno:** Que, esta facultad del Servicio de Aduanas debe ser entendida dentro de la actividad administrativa de fiscalización que le corresponde, las que deben diferenciarse de las diligencias de investigación criminal que debe llevar a cabo el Ministerio Público respecto a delitos aduaneros, organismo que le corresponde en forma exclusiva la dirección de la investigación de los delitos.

Cabe señalar que debido a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se dictó la Ley N° 19.806, que estableció las normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal, modificando entre otras disposiciones, el artículo 23 del D.F.L. 329, que precisamente otorgó la facultad al Director Nacional del Servicio de Aduanas de autorizar la entrada y registro de lugares donde se encuentren mercancías que deban ser objeto de la fiscalización, incluyendo una figura infraccional para el caso de la negativa injustificada para exhibir libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos, que fueran requeridos formalmente por la autoridad administrativa en un acto de fiscalización (González, R.- Ríos, R., “Manual de Derecho Aduanero”, Thomson Reuter, primera edición, 2018, página 32 y 33).

Sin embargo, esta facultad fiscalizadora del Servicio de Aduanas tiene como límite el descubrimiento de un hecho que revista los caracteres de delito, en cuyo caso, deberá abstenerse de continuar con esa labor administrativa, debiendo los funcionarios de ese Servicio colocar esos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público mediante la correspondiente denuncia o querella (González, R.- Ríos, R., ob. cit., pág. 34).

**Décimo:** Que, precisamente en el establecimiento de los límites entre la actividad fiscalizadora de la Autoridad Administrativa y las facultades del Ministerio



Público respecto a las investigaciones de hechos que revistan caracteres de delito, el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley N° 19.806, referente a las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos establecidas en el artículo 161 del Código Tributario, señaló en su considerando 34° que aprobaba la modificación legal *“en el entendido de que la recopilación de antecedentes a que él se refiere no importa ni puede constituir una investigación de aquellas que se mencionan en el citado artículo 80 A y, por ende, que si en el transcurso de esa recopilación el Servicio verifica que existen motivos suficientes para iniciar una investigación por la posible comisión de un hecho que revista caracteres de delito que corresponda sancionar con multa y pena corporal deberá abstener de continuar en dicha actuación”*

De este fallo se concluye que existe una separación entre las facultades de investigación criminal, las que corresponden al Ministerio Público, de las administrativas de fiscalización y control, que son propias de los órganos de la Administración del Estado (González, R.- Ríos, R., ob. cit., pág. 35).

**Undécimo:** Que de lo que se viene señalando, en este caso, se concluye que los funcionarios del Servicio de Aduanas, una vez que constataron la existencia de bolsas que contenían cigarrillos, sin que los acusados les proporcionaran libros, papeles o documentos que acreditarán el ingreso legal de esas mercancías, debieron abstenerse de proseguir con las diligencias, al estar frente a hechos que pudieran revestir los caracteres de delito, en la especie el ilícito de contrabando aduanero, debiendo efectuar la denuncia correspondiente al Ministerio Público, organismo que debía determinar las diligencias de investigación que debían adoptarse, así como si era necesario obtener autorizaciones del juez



de garantía para llevar a cabo medidas que pudieran afectar derechos y garantías constitucionales de los imputados, tales como el respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad del domicilio.

**Duodécimo:** Que, en este escenario los agentes del Servicio de Aduanas ejecutaron diligencias, incluida la incautación de la mercancía encontrada al interior del domicilio, fuera de la órbita de sus atribuciones, porque de acuerdo a lo expresado por ellos mismos, como se advierte de la lectura de la sentencia y a partir de los presupuestos fácticos relatados en estrados por las defensas, resultó demostrado que los funcionarios continuaron con las diligencias, luego de haber constatado la existencia de los cartones de cigarrillos en unas bolsas plásticas negras, sin que los imputados contaran con la documentación que acreditaba su internación al país de manera legal, esto es, se encontraban frente a hechos que revestían el carácter de delito, y no obstante ello, continuaron con la fiscalización, prosiguiendo con el registro del domicilio de uno de los imputados y la incautación de la mercancía y demás evidencias.

Cabe agregar, que los funcionarios del Servicio de Aduanas al constatar hechos que revestían el carácter de delito, debieron abstenerse de continuar con la fiscalización y denunciar tales circunstancias al Ministerio Público, a efectos que efectuara la investigación de rigor, debiendo el fiscal determinar si era necesario obtener las autorizaciones del juez de garantía, tanto para registrar el domicilio, incautar las mercancías que se encontraren y si era procedente la detención de los acusados, así como dar instrucciones a la Policía.



Todo ello no aconteció, pues los agentes del Servicio de Aduanas persistieron en la fiscalización, registrando todo el inmueble y procediendo a la incautación de la mercancía, interrogando a los imputados sobre su origen.

**Décimo tercero:** Que, en el mismo sentido es necesario señalar que si los funcionarios del Servicio de Aduanas estimaron que estaban frente a indicios que daban cuenta de la existencia de un delito de contrabando, en ese momento los acusados adquirieron la calidad de imputados, pues precisamente ello motivó que dichos funcionarios, auxiliados por los agentes policiales, registraran todo el domicilio y le requirieran información sobre el origen de la mercancía.

En esta línea, cualquier manifestación o autorización que los acusados hubieran efectuado, no es sino el colofón de una serie de graves irregularidades cometidas por los funcionarios del Servicio de Aduanas y de los policías, que iban dirigidas desde su inicio a conseguir antecedentes y evidencias de la comisión del delito de contrabando, no obstante contar a su juicio con indicios que los encartados eran autores de un ilícito aduanero.

Sin embargo, los funcionarios del Servicio de Aduanas se abstuvieron de dar a conocer los hechos al Ministerio Público y los policías de informar a los hermanos Fuentes Aracena que estaban siendo sindicados como autor de un delito y darles conocer todos sus derechos, como lo ordena perentoriamente el artículo 93 a) el Código al señalar: “a) Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes”, pudiendo efectuar una serie de actuaciones, de manera autónoma a fin de recabar los antecedentes para poder imputar la comisión del ilícito a los acusados, sin requerir las instrucciones al fiscal.



**Décimo cuarto:** Que, lo anterior corresponde relacionarlo con el artículo 8º del Código Procesal Penal, en cuya virtud el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, aspecto que tampoco fue aplicado en el presente caso a los hermanos Fuentes Aracena, desde que funcionarios policiales obtuvieron, supuestamente, de José Fuentes su autorización para registrar el inmueble y de ambos acusados declaraciones sobre el origen de la mercancía.

Otro tanto aconteció con el artículo 93 del mismo Código, en el que se consagran derechos y garantías del imputado sin ningún tipo de restricciones, en especial las de sus letras b) y g), consistentes en reconocer como tales el ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación, así como a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, los que por la inadvertencia ya anotada no le fueron considerados.

**Décimo quinto:** Que, de la misma manera, al no poder los funcionarios del Servicio de Aduanas continuar con la actividad fiscalizadora al constatar hechos que podrían revestir el carácter de delito, debiendo denunciarlos al Ministerio Público, para que este último organismo instruyera el actuar de la Policía y recabara si fuere necesario las autorizaciones del juez de garantía que afectaran derechos de los imputados, tampoco es posible considerar que en este caso se haya estado ante una situación de flagrancia, porque no se estaba visiblemente cometiendo un delito ni existía un grado de certeza sobre si acababa de cometerse, pues solo constataron la existencia en ese momento de bultos en el antejardín del domicilio de uno de los imputados, que solo al registrarlos se percataron que se trataba de cigarrillos.



**Décimo sexto:** Que por ello y a propósito de la situación que regula el artículo 206 del Código Procesal Penal, para que la policía pueda ingresar a un inmueble en el caso que regula la citada disposición del compendio en referencia, deben existir llamadas de auxilio, cual no es el caso, o signos evidentes de estarse cometiendo un delito, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren, pero, siendo una excepción a la cautela de las garantías fundamentales, su interpretación debe ser restrictiva.

Por su parte, la flagrancia encierra en sí las pruebas de su realización, es la percepción personal del hecho delictivo que se ve, se observa, de manera que en esta situación se precisa de una inmediata intervención policial a fin de que cesen el delito y sus efectos. Por ello, si no hay percepción sensorial de la comisión de un delito, no habrá flagrancia, sino que sólo se estará ante una actuación por sospecha.

Por otro lado, el artículo 206 citado exige “signos evidentes”, en plural: varios elementos que permitan concluir que en el lugar se está cometiendo un delito. En el caso que se analiza, el solo hecho de constatar la existencia de bultos en el antejardín del inmueble de uno de los imputados, que, al registrarlos, constataron que eran cigarrillos no satisface el plural.

**Décimo séptimo:** Que las circunstancias anotadas precedentemente confirman la tesis de que los funcionarios del Servicio de Aduanas debieron efectuar la denuncia al Ministerio Público y que los funcionarios policiales debieron esperar las instrucciones del fiscal respecto a la práctica de diligencias de la



investigación, en especial, lo referente a continuar con el registro del inmueble e interrogar a los imputados sobre el origen de la mercancía.

**Décimo octavo:** Que, en consecuencia, cuando los funcionarios del Servicio de Aduanas continuaron con la fiscalización, asistidos por los policías, no obstante que ya habían constatado la existencia de hechos que pudieren constituir delitos, absteniéndose de efectuar la denuncia al Ministerio Público, realizaron un procedimiento en una forma no autorizado por la ley, por lo que todas las actuaciones realizadas por ellos, así como los cigarrillos que se incautaron constituyen prueba ilícita, misma calidad que tiene, producto de la contaminación, toda la evidencia que de ella deriva, esto es, no sólo esos cigarrillos, sino que también las declaraciones de los funcionarios del Servicio de Aduanas y de los policías sobre esas circunstancias, fotografías y demás documentos y testimonios que hayan derivado de ese primitivo hallazgo.

Del mismo modo, cuando los jueces la valoraron en el juicio oral y en la sentencia que pronunciaron con posterioridad, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales de los imputados que aseguran su derecho a la inviolabilidad de su hogar, a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos.

**Décimo noveno:** Que la exigencia del debido proceso supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto que no se acató, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación



causal entre la diligencia censurada y la prueba de cargo obtenida, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella, como se dirá en lo resolutivo.

**Vigésimo:** Que atendido lo resuelto, y de conformidad al artículo 384, inciso 2°, del Código Procesal Penal, no se emitirá pronunciamiento sobre las demás alegaciones que sustentan la causal de la letra a) del artículo 373 del mismo código, que esgrimen ambos recursos.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 377 y 384 del Código Procesal Penal, **se acoge** los recursos de nulidad deducido por las defensas de los acusados José Luis Fuentes Aracena y Arturo Bernardo Fuentes Aracena y, en consecuencia, **se invalidan** la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés y el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT 406-2023 y RUC 2200185369-8 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, salvo la Resolución N° 561, de 23 de febrero de 2022, dictada por el Servicio Nacional de Aduanas.

**Acordada con los votos en contra de la Ministra señora Letelier y del Abogado Integrante señor Ferrada**, los que fueron de la opinión de rechazar los recursos de nulidad, en virtud de las siguientes consideraciones:

1°) Que, conforme al artículo 23 del D.F.L. 329, en el ejercicio de las facultades de fiscalización o control, el Director Nacional del Servicio de Aduanas podrá ordenar la entrada, registro e incautaciones en los lugares en que se





encuentren o se presuma fundadamente que se encuentran las mercancías a fiscalizar, así como los libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos relativos a las mismas, las que puede delegar en funcionarios del organismo.

En la misma disposición se señala que los funcionarios que designe el acto administrativo, en cumplimiento de esas órdenes pueden requerir el auxilio de la fuerza pública, en caso de oposición, debiendo funcionarios de la policía prestarla.

La misma norma sanciona la negativa injustificada a exhibir libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos, cuando fueren requeridos formalmente por el Servicio en un acto de fiscalización, con multa de hasta una vez el valor de las mercancías objeto de la fiscalización.

2º) Que, del citado artículo, se concluye que el Director Nacional del Servicio de Aduanas o a quien delegue esa facultad, tiene la atribución de autorizar la entrada y registro de inmuebles, donde se presuma fundadamente que se encuentran mercancías que deben ser fiscalizadas, lo que aconteció en este caso, pues, al tener conocimiento la autoridad administrativa de que en el domicilio de Los Aramos N° M-), Forestal, Viña del Mar, a través del análisis de información efectuada tanto por el Servicio como por la Policía de Investigaciones, dictó una resolución que autorizaba dicha diligencia, expresando los nombres de los funcionarios que la cumplirían, como también que se encontraban facultados para requerir el auxilio de funcionarios policiales para llevarla a cabo.

En virtud de ese acto administrativos, los funcionarios de Aduanas y los agentes policiales se constituyeron en el domicilio indicado, informándole a quien dijo ser el dueño, que se encontraban efectuando la fiscalización ordenada, por lo



que ingresaron al inmueble, encontraron en su antejardín una serie de bultos que abrieron, constatando que se trataba de cartones de cigarrillos y al requerir los libros, papeles y documentos que justificaran su ingreso legal al país, no fueron proporcionados.

**3°)** Que, de lo anterior se sigue que, en virtud de la facultad fiscalizadora que le asiste al Servicio de Aduanas, respecto de las mercancías que ingresan al país, se autorizó la entrada y registro de un domicilio, circunstancia que no se encuentra discutida, acreditándose que en su interior existían cigarrillos que habían sido internados irregularmente a Chile. Así, dentro de la esa atribución administrativa indicada se constató la existencia de un delito flagrante, situación que también fue observada por los funcionarios policiales que asistían a la diligencia, por lo que procedieron a realizar las primeras diligencias y la detención de los imputados, conforme las facultades que les confieren los artículos 83 y 129 del Código Procesal Penal.

**4°)** Que, sentado lo anterior, no pudo vulnerarse por los funcionarios del Servicio de Aduanas y los policías el derecho al debido proceso y en particular, el derecho a la inviolabilidad del hogar, por cuanto los primeros se encontraban facultados legalmente en virtud de la Resolución N° 561, a entrar y registrar el domicilio de uno de los imputados, en virtud de la potestad administrativa de fiscalizar, dictada de conformidad al artículo 23 del D.F.L. 329, y los segundos, al constatar la existencia de un delito flagrante, a llevar a cabo las primeras diligencias, resguardar el sitio del suceso y detener a los imputados, de acuerdo a los artículos 83, 129 y 130 del Código Procesal Penal, única forma de hacer efectiva la persecución penal.



5º) Que, exigir proceder de otra forma, suspendiendo la actividad administrativa de fiscalización y no permitir el desarrollo de las primeras diligencias investigativas por parte de la policía, encontrándose ante un delito flagrante, como en todos los demás supuestos habilitados por el Código Procesal Penal, haría inútil e ineficaz la fiscalización administrativa y prácticamente imposible la persecución criminal de estos delitos a partir de aquella.

6º) Que, así las cosas, no advirtiéndose la infracción sustancial en los derechos fundamentales de los acusados por parte de los funcionarios del Servicio de Aduanas y agentes policiales, desde que éstos actuaron en ejercicio de mandatos y facultades establecidos en la ley, deben ser desestimados los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los imputados.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N° 250907-2023

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firman el Ministro Sr. Valderrama y las Ministras Sra.as Letelier y Gajardo, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero, y haciendo uso de sus feriados legales la segunda y tercera integrante.





En Santiago, a cinco de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

